La indefinición como solución al problema agrario

La reducida productividad en el campo mexicano, la desigual e injusta distribución de la tierra, el agua y el crédito, aunadas a la existencia de 3 millones de desempleados rurales, reclaman de manera cada vez más urgente una solución definida por parte de las autoridades públicas.

En las últimas semanas, el descontento campesino se ha venido manifestando más acentuadamente a través de constantes invasiones en varios estados de la República; invasiones que, como en el caso de Veracruz, han debido ser reprimidas dejando como saldo tres muertes: la de dos campesinos y la de un comandante de policía.

En respuesta a las crecientes presiones campesinas, las cuatro centrales agrupadas en torno al Pacto de Ocampo organizaron una gran concentración en Ciudad Obregón, Sonora, el pasado lunes 19. Acudieron a ésta cerca de 50 000 campesinos, el presidente de la República, los gobernadores de los estados, diputados y senadores por el sector campesino y los altos dirigentes del partido oficial.

El anuncio de un acontecimiento de tal magnitud levantó una serie de expectativas respecto del establecimiento de medidas concretas para resolver el problema de las masas campesinas desposeídas. Bien pronto las expectativas se derrumbaron. Las soluciones fueron diferidas.

Veamos en qué se fundaban las expectativas mencionadas.

El Pacto de Ocampo, organizador del evento, presentó como propuesta fundamental la limitación a 20 hectáreas de riego de la pequeña propiedad, es decir, la reducción de la superficie de riego que actualmente es de 100 hectáreas.

La aplicación de dicha propuesta implicaba la definición de una política agraria que, como ha señalado Gastón García Cantú, recobraría el espíritu de la Constitución de 1917 y, consecuentemente, aboliera las reformas de 1946 al artículo 27 constitucional.

Una política así significaba, además, eliminar el derecho de amparo en materia agraria y la revisión de los certificados de inafectabilidad que, en muchos casos, como el del Valle del Yaqui en Sonora, han servido para ocultar la existencia de verdaderos latifundios.

Dicho de otra manera: realizar esa propuesta significaba adoptar una política de reducción de la propiedad agraria particular, esto es, una política en contra de la burguesía agrícola, en quienes se han concentrado los medios de producción, los créditos públicos y privados, la mayor parte del ingreso rural y del progreso técnico y, decididamente, a favor de las masas campesinas de bajo nivel de ingresos.

Los elocuentes discursos del presidente de la República, del presidente

del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, así como del propio Secretario de la Reforma Agraria, fortalecieron las esperanzas de definición de una política que optaría por los principios democráticos de la Constitución de 1917, orientada a una distribución equitativa de la tierra y la consiguiente infraestructura necesaria para garantizar su adecuada productividad.

El presidente Echeverría afirmó que la resolución a los problemas del campo se haría con la ley en la mano, debido a que han sido generados por la inaplicación de la ley a lo largo de los últimos 30 años.

El presidente apuntó:

el camino de la ley es todavía bueno para el país... vamos a violentar los procesos legales en base a la Constitución, ya que es responsabilidad del gobierno encauzar a través de las leyes los problemas sociales.

Porfirio Muñoz Ledo, presidente del PRI, denunció la utilización abusiva del derecho de amparo y propuso

la búsqueda de nuevas formas de explotación en el campo, capaces de demostrar que la economía social —término que recuerda la eufemísticamente llamada tercera vía mexicana— en manos de los campesinos con el apoyo del Estado, no sólo es más justa, sino también más eficiente.

Por su parte, el secretario de la Reforma Agraria, Félix Barra García, cuya Secretaría fue trasladada ese mismo día a Ciudad Obregón, denunció tanto la inaplicabilidad de la Reforma Agraria en Sonora desde hace 30 años, como la manipulación del derecho de amparo.

Mientras tanto, en Saltillo, el candidato priista a la presidencia de la República, afirmaba: "es ya inadmisibles la dimensión inafectable de la pequeña propiedad".

Las reiteradas promesas de apego estricto a la ley, junto con las observaciones acerca de la inaplicabilidad de la reforma agraria durante los últimos 30 años, dejaron sentir que se tenía en mente la posibilidad real de revisar y eventualmente revocar las reformas de 1946 al artículo 27 constitucional. Dichas reformas, por un lado, en su fracción XV, fijaron la pequeña propiedad inafectable a 100 hectáreas de riego o su equivalente en otras clases de tierra y, por otro, en su fracción XIV dejaron estipulada la facultad de promover el juicio de amparo por parte de todo aquel propietario de predios agrícolas o ganaderos que contara con un certificado de inafectabilidad.

Estas reformas, dictadas en aras del respeto a la pequeña propiedad, representaron un golpe al propio espíritu que animó el artículo 27, el cual establece que,

la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público... para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y cuidar de su conservación.

Este principio se veía entonces seriamente restringido frente a la existencia de certificados de inafectabilidad y frente a la barrera del derecho de amparo.

Ciertamente, la revocación de estas fracciones traería necesariamente el enfrentamiento con los intereses de una de las fracciones de la clase económicamente dominante: la burguesía agrícola.

En efecto, las declaraciones en torno a la propuesta de reducir la pequeña propiedad a 20 hectáreas resultaron tan alarmantes que tanto pequeños agricultores como representantes de la iniciativa privada no tardaron en expresar su profundo repudio.

Diversos líderes de asociaciones de agricultores y ganaderos de varios estados argumentaron que las unidades de 100 hectáreas se trabajan con alta tecnificación, abaratamiento de insumos y reducción de costos totales, por lo que su reducción traería como consecuencia la disminución de la productividad y el retraimiento de las inversiones, lo cual derivaría, fatalmente, en la incapacidad de satisfacer la demanda creciente de alimentos.

Los comerciantes organizados, a través de su vocero, Víctor Manuel Gaudiano, presidente de la CONCANACO, manifestaron su desacuerdo respecto de la limitación de la pequeña propiedad, declarando que esto significaría que la explotación de la tierra dejase de ser un negocio.

El presidente del PAN, Manuel González Hinojosa, fue aún más lejos en su defensa de la propiedad privada, poniendo en duda la capacidad económica administrativa y técnica del gobierno para solucionar el problema agrario. Había que dejarlo entonces en manos de los particulares. El líder panista afirmó:

aun cuando México se convirtiera en un gran ejido administrado por el Estado, no se resolvería el problema agrícola y agrario del país porque faltarían los recursos complementarios e insumos necesarios para organizar la producción.

Cabe señalar aquí que desde la perspectiva capitalista de la rentabilidad de la tierra, la parcelización de ésta reclama una inversión fraccionalizada, la cual, en efecto, trae como consecuencia la disminución en las ganancias. Ésta es la razón tecnócrata, razón que evoca fielmente los principios de una formación social capitalista y los valores de la eficacia y la ganancia que la sustentan, pero razón unilateral que choca contra la razón de la dignidad, los derechos humanos y el espíritu que animó al constituyente de 1917.

En defensa de esta razón tecnócrata, el rechazo directo a la proposición central de las autoridades agrarias fue determinante. La disyuntiva estaba en impulsar esta propuesta hasta sus últimas consecuencias y ser fieles a los fundamentos de la reforma agraria, o retirarla.

Vino el paso atrás. Nuevos voceros del gobierno mexicano justificaron la retirada. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mario G. Rebollo, expresó que era preferible el abuso del derecho de amparo que su restricción.

Luis M. Farías, ex-gobernador de Nuevo León y miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, declaró que la pequeña propiedad no sería reducida a 20 hectáreas, puesto que esto requeriría modificar la Constitución, lo cual no se haría. El senador Farías presentó también una defensa del amparo agrario, definiéndolo como una de las instituciones mexicanas más nobles. Propuso en cambio que la solución a la productividad era dar a muchos a trabajar una gran extensión bajo una sola dirección. Dicho de otra manera, estuvo de acuerdo con las críticas mencionadas. Era pues un hecho que el gobierno mexicano no se atrevía a llevar a cabo la propuesta inspirada en los principios básicos de la Revolución Mexicana.

Sólo quedaba reforzar una propuesta alternativa: la alianza entre pequeños propietarios y ejidatarios, algo equivalente, en el sector obrero, a la alianza entre patrones y trabajadores; una alianza entre intereses opuestos e irreconciliables; una alianza de elementos antagónicos.

La idea de esta alternativa secundaria había sido recogida por los líderes campesinos en una conferencia de prensa concedida el pasado 12 de abril por el candidato presidencial, quien, posteriormente, tuvo a bien hacer una rectificación al respecto. Sin embargo, la propuesta sí fue acogida, al menos hasta el momento, por la Federación de Pequeños Propietarios de Sonora, quienes aceptaron asociarse con ejidatarios en torno a cooperativas de producción, a las cuales proporcionarían crédito, la maquinaria y la tecnología con la que ya cuentan.

Es preciso preguntarse ahora cómo se logrará la conciliación de lo irreconciliable. ¿Cómo se organizará esta cooperativa? ¿Quiénes tomarán las directrices? ¿Convertirá esto a los ejidatarios en socios de los pequeños propietarios? No parece plausible. ¿Se tratará únicamente de una especie de reparto de utilidades?

No es concebible una alianza entre desiguales. Quizá se trate más bien de un compromiso por parte de los pequeños propietarios de proporcionar empleo a los ejidatarios a través del establecimiento de una especie de "empresa" o "fábrica" rural a la cual confluirían los campesinos en calidad de asalariados agrícolas. De ser así, esto significaría la extensión de las relaciones de producción capitalistas en el campo, y, en consecuencia, la necesaria exterminación gradual de los campesinos y de su relación específica con la tierra. En todo caso, esa alianza dejaría fuera a las grandes masas campesinas, desposeídas, lo que provocaría una división y un enfrentamiento entre los mismos campesinos.

Persiste la indefinición. La desesperación de los campesinos va en aumento. Las promesas de aplicación estricta de la ley, que han mantenido hasta ahora una relativa estabilidad en el campo mexicano, empiezan a verse amenazadas por la magnitud de los mismos problemas. La defensa de la estabilidad política a costa de la productividad no es más que una alternativa.

No quedan sino dos caminos: o la solución netamente tecnócrata que sacrifique los derechos de la población campesina en defensa de la productivi-

dad y de los intereses que la controlan y concentran sus beneficios, o la solución democrática que exige un compromiso constante y definitivo con las justas demandas campesinas.

Ante la indefinición, las alternativas se van cerrando. El inminente dilema para el gobierno mexicano está entre la elección de una política valiente y declarada que contemple una doble perspectiva: los derechos legítimos del campesino y la eficacia de su trabajo asegurada a través de créditos e insumos esenciales, o la elección de la supuesta eficacia técnica y la consecuente represión.

29 de abril

Jacqueline Peschard